



San Andrés, Isla, Veintiséis (26) de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024)

RADICACIÓN: 88-001-4003-003-2024-00095-00
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELANTE: WENDYS YURANYS TORRES ALVEAR
TUTELADO: RECUPERACIONES NARANJO
RECICLING S.A.S.– SECRETARIA DE
MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA.

SENTENCIA No. 00048-2024

1. OBJETO

Procede el Despacho a decidir la acción de tutela instaurada por la señora WENDYS YURANYS TORRES ALVEAR, por intermedio de apoderado judicial, en contra de la RECUPERACIONES NARANJO RECICLING S.A.S.– SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

2. ANTECEDENTES

La accionante, interpuso acción de tutela por razón de los hechos que a continuación se sintetizan:

Indica que, en fecha 23 de febrero de 2024, radicó ante la Gobernación Departamental, petición con el objeto de que se remitiera a su favor el listado de los certificados expedidos en su nombre por la empresa Recuperaciones Naranjo Recycling, correspondientes al año 2022.

Señala que, hasta la fecha de interposición de la acción constitucional, la entidad encartada no se ha pronunciado de fondo respecto de la solicitud objeto de tutela.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en los anteriores hechos, la accionante, solicita:

- 3.1.** Que se tutele su derecho fundamental de petición
- 3.2.** Se ordene a RECUPERACIONES NARANJO RECICLING S.A.S.– SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, que, den respuesta de fondo a la petición radicada en fecha 23 de febrero de 2024.

Expediente: 88-001-4003-003-2024-00095-00

Accionante: WENDYS YURANYS TORRES ALVEAR,

Accionado: RECUPERACIONES NARANJO RECYCLING S.A.S.– SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Acción: TUTELA

SIGCMA

4. ACTUACIÓN JUDICIAL

Mediante Auto No. 300 de fecha diecisiete (17) de abril de dos mil veinticuatro (2024), se admitió la presente acción de tutela, donde se ordenó comunicarle a la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina- secretaria de Movilidad y Recuperaciones Naranjo Recycling, con el fin de que contestaran la presente solicitud y rindiera los informes del caso dentro del término de dos (2) días, siguientes a la notificación de la presente acción.

El anterior auto fue notificado mediante correo electrónico el día 17 de abril del año en curso, los soportes de la notificación reposan dentro del expediente electrónico pdf No.07 y 08.

5.- CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN DE TUTELA

Dentro del término de traslado, se observa que la empresa RECUPERACIONES NARANJO RECYCLING, dio contestación, señalando que la entidad brindó respuesta a la petición incoada por la actora y la misma fue debidamente notificada al correo electrónico aportado en el escrito constitucional.

En consecuencia, solicita se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

Por su parte, la GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – SECRETARIA DE MOVILIDAD, pese a haber sido debidamente notificada, guardo silencio en el traslado de la acción constitucional.

6. CONSIDERACIONES

6.1. COMPETENCIA:

De conformidad con el numeral 1° del Art. 1° del Decreto 1983 del 2017, este Despacho es competente para conocer la presente solicitud de tutela.

La norma citada, respecto del *reparto de la acción de tutela*, dispone lo siguiente:

“(...) Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital, municipal y contra particulares, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a los jueces municipales”. Lo anterior por ser la tutelada una entidad de la orden Departamental encargada del control poblacional.

Expediente: 88-001-4003-003-2024-00095-00

Accionante: WENDYS YURANYS TORRES ALVEAR,

Accionado: RECUPERACIONES NARANJO RECICLING S.A.S.– SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Acción: TUTELA

SIGCMA

Frente a la competencia, según el criterio del lugar donde se haya producido el hecho o sus efectos, los mismos tuvieron ocurrencia en la Isla de San Andrés.

Así las cosas, son los Juzgados Municipales del Distrito Judicial de San Andrés, los competentes para conocer la presente solicitud de tutela, según el correspondiente reparto.

6.2. PROCEDENCIA:

El Artículo 86 de la Constitución Política de 1991, desarrollado en los Decretos 2591 y 306, ambos del mismo año, ha institucionalizado la acción de tutela como una garantía y un mecanismo constitucional de protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y de los particulares, en los casos que establezca la ley.

Dicha acción muestra por su finalidad un carácter extraordinario, en la medida en que su utilización parte del respeto y garantía a la consagración constitucional y legal de las jurisdicciones ordinarias y especiales, así como de las respectivas acciones, procedimientos, instancias y recursos que ante las mismas se surten, lo que supone un uso en forma supletiva con carácter subsidiario; de manera que, la procedencia de la tutela se restringe a la inexistencia de otros medios de defensa judicial o a la ineficacia de los mismos, como también a su utilización transitoria ante la presencia de un perjuicio irremediable que permita contrarrestar dicho efecto en forma temporal, con una operancia inmediata, urgente, rápida y eficaz, mediante el trámite de un procedimiento preferente y sumario, hasta tanto la autoridad correspondiente defina el fondo del asunto.

En el presente asunto, se trata del ejercicio de la Acción de Tutela incoada contra el ente departamental y una empresa privada que desarrolla actividades dentro del territorio insular, por tanto, es procedente, al tenor de los Artículos 5º y 42 Numeral 2º del Decreto 2591 de 1991.

6.3. PROBLEMA JURÍDICO

A partir de los supuestos fácticos planteados anteriormente, el problema jurídico que debe resolver el Despacho consiste en establecer ¿si RECUPERACIONES NARANJO RECICLING S.A.S.– SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, amenazan y/o vulneran o no el derecho fundamental de petición de la señora WENDYS YURANYS TORRES ALVEAR, al no resolver de fondo la solicitud radicada en fecha 23 de febrero de 2024.

6.4. ANÁLISIS NORMATIVO Y/O JURISPRUDENCIAL DE LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS O AMENAZADOS

6.4.1. DERECHO DE PETICIÓN

De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. Asimismo, esa norma estableció que el legislador podría reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Ley 1755 del 30 de junio de 2015, es la nueva normatividad que regula el derecho de petición, estableciendo las siguientes reglas, y sustituyendo las disposiciones legales anteriores, previstas en la Ley 1437 de 2011:

“ARTÍCULO 13. OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES. *Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.*

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos”.

Sobre lo anterior, La Corte Constitucional, en sentencia T-369/13 del 27 de junio de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos, ha establecido los presupuestos mínimos que determinan el ámbito de protección constitucional y ha definido sus rasgos distintivos en los siguientes términos:

“(i) Se trata de un derecho fundamental, el cual a su vez es determinante para la efectividad de otros derechos fundamentales tales como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) Este derecho se ejerce mediante la presentación de solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas y a los particulares (iii) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión planteada por el peticionario; (iv) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: a) debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa, oportuna y acorde con lo solicitado; y b) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. (v) La respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; por regla

general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

(...)

Se concluye entonces, que el derecho de petición consagra de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”. (Negrilla del Despacho).

Al respecto, en sentencia T-138 del 2017 Luis Guillermo Guerrero Pérez, la H. Corte expresó:

“El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 del Texto Superior como una garantía fundamental de las personas que otorga escenarios de diálogo y participación con el poder público y que posibilita la satisfacción de otros derechos constitucionales en el marco del Estado social de derecho. Su núcleo esencial se encuentra en la posibilidad de presentar solicitudes de manera respetuosa ante las autoridades públicas o ante los particulares en los casos previstos en la ley, surgiendo a cargo de sus destinatarios el deber de recibirlas, tramitarlas y resolverlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido.

En relación con lo expuesto y con énfasis en la obligación de tramitar y resolver las peticiones, esta Corporación ha señalado que la respuesta que se brinde debe cumplir, por lo menos, con los siguientes requisitos: (i) debe ser concedida de manera pronta y oportuna dentro del término legal; (ii) su contenido debe dar una solución de fondo y acorde con las cargas de claridad, efectividad, suficiencia y congruencia; y (iii) la decisión que se adopte debe ser puesta en conocimiento del interesado con prontitud. A continuación, se hará una breve referencia a los elementos previamente mencionados”.

6.5. CASO CONCRETO

Manifiesta la señora Wendys Yuranys Torres Alvear, que las encartadas dentro del presente asunto vulneran el derecho fundamental de petición, al no resolver de fondo la petición radicada el día 23 de febrero de 2024, con el objeto de que le fuera remitido las constancias de los certificados emitidos a su favor por la empresa Recuperaciones Naranjo Recycling en el periodo de 2022.

Es así como, el artículo 86 de la Constitución consagra la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario, mediante el cual se busca evitar, de manera inmediata, la amenaza o vulneración de un derecho fundamental. Su procedencia está condicionada a que *“el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”*, sin embargo, la H. Corte Constitucional ha señalado que no puede declararse la improcedencia de la tutela por la sola existencia en abstracto de un medio ordinario de defensa judicial. En el marco del caso concreto, el juez constitucional debe analizar si la acción dispuesta por el ordenamiento jurídico es idónea y eficaz para proteger los derechos fundamentales comprometidos. En el evento en que no lo sea, la acción de tutela procederá para provocar un juicio sobre el fondo.

Del análisis del material probatorio obrante en el expediente, se encuentra probado que:

- i. La actora radicó petición ante la entidad Departamental en fecha 23 de abril de 2024.

WENDYS YURANIS TORRES ALVEAR, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la **C.C. No. 1.001.913.193**, obrando en nombre y representación propia, en mi calidad de actual propietaria de los CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA EMPRESA, RECUPERACIONES NARANJO RECYCLING SAS NIT.: 806.011.019-0, por el presente con mi acostumbrado respeto, solicito comedidamente se sirva, ordenar a quien corresponda, remitir el listado de los certificados emitidos en el año 2022 a mi nombre a la oficina de Movilidad, a la mayor brevedad posible.

Lo anterior, en virtud a que, a pesar de los múltiples requerimientos hechos, la empresa de RECUPERACIONES NARANJO RECYCLING SAS NIT.: 806.011.019-0, se ha negado injustificadamente a enviar dicha información, razón por la que, no he podido formalizar el ingreso de las motos adquiridas y cuyos cupos amparan su movilidad en San Andrés, entre otra clase de inconvenientes.

Y al señor, Secretario de Movilidad **JUAN CARLOS RIPOLL PADILLA**, se sirva darle trámite, ágil, rápido y expedido a las certificaciones que, igualmente han sido radicados en su Despacho y que por razones que desconozco se han negado, no ha sido posible que se hayan expido los autorizaciones de embarque y DRV correspondientes a las motos adquiridas y que se encuentran en puerto, ocasionando un lucro cesante y daños emergentes que en su debido momento estaré valorando para su recuperación.

- ii. Así mismo, se encuentra acreditado que en fecha 4 de abril del año en curso, la secretaria de Movilidad de la Gobernación Departamental dio contestación a la petición, señalando que no contaba con la relación de los certificados emitidos durante la vigencia anterior, en la cual se encuentra incluido los del

Expediente: 88-001-4003-003-2024-00095-00

Accionante: WENDYS YURANYS TORRES ALVEAR,

Accionado: RECUPERACIONES NARANJO RECYCLING S.A.S.– SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Acción: TUTELA

SIGCMA

2022, requeridos por la actora. Seguidamente, le indicó a la señora Torres Alvear que dirigiera la petición directamente a la empresa Recuperaciones Naranjo Recycling, con el fin de que esta diera respuesta de fondo a su solicitud.

iii. Finalmente, tenemos que, en el traslado de la acción constitucional, la empresa Recuperaciones Naranjo Recycling, dio respuesta a la petición de la actora en fecha 19 de abril de 2024, señalando que:

“(...) Sea lo primero aclarar que nuestra empresa no ha recibido de su parte petición o solicitud diferente a este escrito, por otra parte, tenga en cuenta que la información almacenada en la empresa debe ser custodiada por contener datos sensibles y está disponible para las autoridades que lo requieran en el ejercicio de sus competencias, es así como la responsabilidad de nuestra empresa se limita a expedir los certificados de desintegración física total de los vehículos, una vez se haya culminado la desintegración, de conformidad con lo señalado en la resolución 646 del 2014 y así se realizó y entregó para el año 2022 en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, si usted ha adelantado otros trámites ante las secretarías de movilidad y no han sido atendidos, esta situación ya no es de nuestro control.

A pesar de que no se evidencia acreditación de legitimación en la causa por activa al no allegar constancia de su calidad de titular del derecho, tampoco nos precisa a que consecutivos de certificados se refiere en su solicitud, nuestra empresa se apoya en los postulados de buena fe y consulta en sus archivos información general de la señora WENDY YURANIS TORRES (...)”

Igualmente, señala la empresa referida que a la contestación adjuntó una relación de los certificados emitidos en favor de la accionante durante el año 2022, así mismo, se tiene que dicha contestación fue debidamente notificada al correo electrónico de la actora yuranis081016@gmail.com.

RESPUESTA A TUTELA Radicado: 88001-4003-003-2024-00095-00

araceli goenaga <asesoriasagjuridicas@gmail.com>

Vie 19/04/2024 7:09 PM

Para: Juzgado 03 Civil Municipal - San Andrés - San Andrés <j03cmpalsas@ceudoj.ramajudicial.gov.co>

CC: yuranis081016@gmail.com <yuranis081016@gmail.com>, GUSTAVO CASTILLO LEAL <gcastilloabogado1@gmail.com>

3 archivos adjuntos (712 KB)

CONSTANCIA ENVIO RESPUESTA PETICION WENDY htm& RESPUESTA A ENVIAR AL JUZGADO CON CONSTANCIA DEL ENVIO DE LA RESPUESTA A WENDY.pdf; Respuesta Sra Wendy Torres.pdf

Tras realizar el estudio de los documentos allegados en traslado de la acción constitucional, se obtiene que las respuestas del ente departamental y la empresa accionada resuelven de fondo la petición de la actora, quien tiene a su disposición la relación de las certificaciones expedidas a su favor en el año 2022.

Por lo anterior, al haberse dado respuesta a la petición en el curso de este trámite constitucional, no podría hablarse en el caso concreto de una vulneración a los

Expediente: 88-001-4003-003-2024-00095-00

Accionante: WENDYS YURANYS TORRES ALVEAR,

Accionado: RECUPERACIONES NARANJO RECYCLING S.A.S.– SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Acción: TUTELA

SIGCMA

derechos fundamentales invocados en la presente acción, toda vez que se resolvió de fondo la solicitud impetrada por la accionante. Por lo tanto, nos encontramos frente a lo que la Jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha denominado hecho superado por carencia actual de objeto.

Frente al hecho superado en las acciones de tutela, la H. Corte Constitucional en Sentencia T- 358 de 2014 ha manifestado que:

La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria.

En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir.

La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales. Entonces, cuando cesa la amenaza a los derechos fundamentales de quien invoca su protección, ya sea porque la situación que propiciaba dicha amenaza desapareció o fue superada, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo de protección judicial, en la medida en que cualquier decisión que el juez de tutela pueda adoptar frente al caso concreto carecerá de fundamento fáctico.

En este sentir, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado, de suerte que la Corte ha entendido que una decisión judicial bajo estas condiciones resulta inocua y contraria al objetivo constitucionalmente previsto para la acción de tutela.

De acuerdo con lo anterior, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el

Expediente: 88-001-4003-003-2024-00095-00

Accionante: WENDYS YURANYS TORRES ALVEAR,

Accionado: RECUPERACIONES NARANJO RECYCLING S.A.S.– SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Acción: TUTELA

SIGCMA

juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción. Tenemos entonces, que cuando se presenta el fenómeno de hecho superado, en términos de decisiones judiciales, la obligación del juez de tutela no es la de pronunciarse de fondo.

Concluye la suscrita, y sin necesidad de hacer mayores elucubraciones al respecto, que se cumple lo contemplado en la anterior jurisprudencia, como quiera que hay carencia actual de objeto por hecho superado, ya que, entre la presentación de la acción de tutela y fallo de este despacho, se encuentra reparada la amenaza y/o vulneración de los derechos cuya protección se reclamaba, por lo que el Despacho declarará improcedente la acción ante la carencia actual del objeto por hecho superado.

En mérito de lo anterior, **EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS ISLA**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la presente acción de tutela, al presentarse un hecho superado por carencia actual de objeto, en virtud de las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente sentencia en la forma ordenada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de impugnación

CUARTO: Si éste fallo no fuere impugnado oportunamente, envíese a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



INGRID SOFÍA OLMOS MUNROE
JUEZA

LHR